

No. 14668. Multilateral

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)*

Argentina

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 1 June 2020

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 June 2020

*No UNTS volume number has yet been determined for this record.

N° 14668. Multilatéral

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4*

Argentine

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 1^{er} juin 2020

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 1^{er} juin 2020

*Le numéro de volume RTNU n'a pas encore été établi pour ce dossier.

Las medidas excepcionales para hacer frente a la pandemia Covid-19 en la Argentina

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego del incremento de personas afectadas a nivel global y el número de muertes registradas. Desde entonces, la crisis generada por el COVID-19 ha ocasionado la saturación de los sistemas sanitarios, la alteración de la economía mundial y una paralización social generalizada.

En ese marco, la República Argentina, al igual que el resto de los países, se encuentra atravesando esta situación excepcional, que ha llevado a sus autoridades a tomar una serie de medidas de emergencia para mitigar la propagación de la enfermedad, ponderando en su accionar el resguardo inobjetable de los derechos humanos de todos los habitantes del país, en consonancia con los llamamientos y recomendaciones del sistema regional y universal de protección de los derechos humanos.

Así, con fecha 12 de marzo de 2020, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, se amplió la emergencia pública sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 el 21 de diciembre de 2019, por el plazo de un año.

Los considerandos de este decreto expresan “Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país. Que, en la situación actual, resulta necesario la adopción de nuevas medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en evidencia científica, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario”.

Luego, con fecha 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encontraran en él en forma temporaria al momento de su dictado, con el objetivo de proteger la salud pública, obligación inalienable del Estado nacional.

Esta disposición prevé que durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales, abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.

Se establecieron además controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria.

Los considerandos del citado decreto expresan la excepcionalidad de la situación: “Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario. Que, toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19. Que, teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la

circulación del virus pandémico SARS-CoV2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de las siguientes variables: la oportunidad, la intensidad (drásticas o escalonadas), y el efectivo cumplimiento de las mismas”.

Asimismo, manifiesta el DNU N° 297/2020 “Que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”. Que, si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inc. 1 el derecho a “...circular libremente...”, y el artículo 12.3 establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”... Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos”.

Cabe destacar que la medida dispuesta por el Decreto N° 297/2020 fue prevista inicialmente hasta el 31 de marzo de 2020, pero luego fue sucesivamente prorrogada a través del Decreto N° 325/2020 hasta el 12 de abril de 2020, el Decreto N° 355/2020 hasta el 26 de abril de 2020, el Decreto N° 408/2020 hasta el 10 de mayo de 2020, y finalmente mediante el Decreto N° 459/2020 se dispuso su extensión hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive.

La situación de excepcionalidad descripta da cuenta de la legitimidad de los fines que se pretenden preservar. En efecto, las medidas de aislamiento han sido adoptadas en forma razonable, de acuerdo con la información médica que dio cuenta de su importancia para evitar la propagación de la enfermedad y la experiencia de otros países que tuvieron que hacer frente a esta grave situación con anterioridad.

En tal sentido, habiendo transcurrido más de 50 días desde el dictado del Decreto N° 297/20, puede decirse que el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en Argentina ha permitido, hasta el momento, contener la epidemia, registrándose una disminución en la velocidad de propagación y evitando la saturación del sistema de salud, tal como sucedió en otros lugares del mundo.

En cuanto a la proporcionalidad de la medida, cabe destacar que desde el inicio se previeron distintos supuestos que permitieron la circulación de personas con tareas esenciales, así como la asistencia a niños, niñas y adolescentes, personas mayores y a quienes lo requieran. Asimismo, mediante normas complementarias se establecieron nuevas excepciones al aislamiento social y a la prohibición de circular para personas afectadas a diferentes actividades y servicios, con el fin de no interrumpir el suministro de servicios esenciales y también incorporar diversas actividades económicas. A partir del dictado del último decreto —DNU N° 459/2020— el aislamiento inició una nueva fase, habiendo sido habilitadas la realización de varias actividades en diversas regiones del país, atendiendo a la favorable evolución epidemiológica existente en la mayor parte del territorio nacional. Las condiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio no fueron modificadas en los grandes centros urbanos, donde actualmente se concentra la mayor proporción de casos de nuestro país —más del 85%—.

Sin perjuicio de la pertinencia de las medidas dispuestas, el Ministerio de Salud de la Nación informó que el 13 de mayo de 2020 fueron confirmados 316 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país, sumando un total de 6.879 positivos. Ello da cuenta de que, pese a la eficacia del aislamiento social dispuesto, aún se está combatiendo la propagación de la enfermedad sin que pueda determinarse el momento exacto en el que cesarán dichas circunstancias.

Por otra parte, además del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la República Argentina dispuso el control estricto del ingreso por las fronteras del país, en congruencia con las limitaciones que han establecido otros Estados.

Así, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/2020, de fecha 16 de marzo de 2020, se estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes por un plazo de 15 días, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio. Este plazo, a su vez, fue prorrogado sucesivamente mediante los Decretos N° 331/2020, 365/2020, 409/2020 y 459/2020 hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive.

A su vez, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 313/2020, de fecha 26 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso ampliar los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a personas residentes en el país y a los/as argentinos/as con residencia en el exterior, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso establecido por el DNU N° 274/2020, previendo asimismo diversas excepciones a dicha prohibición.

Los considerandos de esta norma expresan “Que la pandemia del coronavirus COVID-19 continúa su escalada y actualmente existe transmisión comunitaria del mismo, por lo cual, ponderando el flujo de ingreso de nacionales y residentes argentinos precedentemente analizado así como también la forma de transmisión del virus, se considera necesario arbitrar medidas, adicionales a las ya adoptadas, razonables, temporarias y proporcionadas a la situación de riesgo que se contempla, para contribuir a resguardar la salud de las personas y de sus grupos familiares, tanto de los nacionales y residentes que quieren ingresar como de quienes actualmente se hallan en el país, minimizando el ingreso al territorio nacional de posibles casos de contagio potencial, a través de los diversos puntos de acceso al mismo, por el período de tiempo más breve posible, con el fin de adecuar las medidas de seguridad suficientes para su reingreso”.

Asimismo, el mismo texto del Decreto N° 313/2020 indica que la medida constituye una decisión de carácter transitorio, la cual no sólo obedece a la necesidad imperiosa de resguardar a quienes se encuentran en el territorio nacional de la propagación del coronavirus COVID-19 sino, también, de generar las condiciones necesarias en los puntos de acceso al país, en términos de infraestructura y atención sanitaria, para recibir a quienes aún se encuentran en el exterior y deban efectuar el tránsito hacia su domicilio o el aislamiento en el lugar donde arriben.

Posteriormente, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 331/2020 de fecha 1° de abril de 2020, se instruyó a las autoridades competentes del Estado nacional a establecer los cronogramas pertinentes y coordinar las acciones necesarias para posibilitar el ingreso paulatino al territorio nacional de las personas residentes en el país y de los/as argentinos/as con residencia en el exterior que no hubiesen podido ingresar durante la vigencia del Decreto N° 313/20, prestando especial atención a las personas pertenecientes a grupos de riesgo.

En virtud de dicha norma, se instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a prorrogar la vigencia del Programa de asistencia de argentinos en el exterior en el marco de la pandemia de coronavirus, creado mediante Resolución MRECIC 62/2020 el 28 de marzo de 2020, a fin de satisfacer las necesidades impostergables de hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica de los argentinos en el exterior, en aquellos casos donde se presentan situaciones de vulnerabilidad que no les permitan resolver la cuestión por sus propios medios. En este el marco, fueron girados los fondos respectivos a los distintos consulados para afrontar las referidas necesidades, encontrándose por lo tanto las autoridades del Estado nacional realizando todos sus esfuerzos para lograr el retorno de todas las personas que deseen regresar al país de acuerdo con lo allí establecido.

A su vez, cabe destacar que las fronteras terrestres no tienen limitación para argentinos/as o residentes que ingresen en vehículos particulares. Por otra parte, el Estado estipula la cantidad de argentinos/as y residentes que pueden volver diariamente por aire y por tierra en transporte público a nuestro país, siguiendo por tanto el ingreso de los argentinos/as y residentes un camino administrado.

En efecto, conforme surge de la información registrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, al 20 de abril de 2020, aproximadamente el 90% de los argentinos y argentinas que quisieron regresar al país en el marco de la pandemia han podido hacerlo.

En ese sentido, regresaron 168.140 personas a nuestro país por vía aeroportuaria, terrestre y fluvial entre el 16 de marzo y el 17 de abril de 2020, mientras que se estimaba un total de 21.493 de personas que habían manifestado su intención de volver al país al 20 de abril de 2020, por lo cual el 90% el universo total de argentinos y argentinas o residentes con intenciones de regresar al país ya lo han hecho.

Así, de la información reseñada, surge con claridad la proporcionalidad, razonabilidad y pertinencia de las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades nacionales a efectos de garantizar los derechos a la vida y a la salud de la población de nuestro país, limitando los derechos individuales sólo en la medida estrictamente necesaria, en el marco de las enormes dificultades y desafíos que impone el contexto mundial actual.

Finalmente, cabe destacar que en la primera sesión especial remota realizada en nuestro país, el 13 de mayo de 2020, el Senado de la Nación aprobó la totalidad de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional desde que se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio con motivo de la pandemia del coronavirus.

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The exceptional measures to address the COVID-19 pandemic in Argentina

On 11 March 2020, the World Health Organization (WHO) declared the outbreak of the new coronavirus as pandemic, following the increase in the number of people affected around the world and the number of deaths recorded. Since then, the crisis caused by COVID-19 has led to the saturation of health systems, the disruption of the global economy and to a widespread social paralysis.

In that context, the Argentine Republic, like other countries, is experiencing an exceptional situation, which has led its authorities to take a number of emergency measures to mitigate the spread of the disease, taking into account, in their actions, the unquestionable protection of human rights of all inhabitants of the country, in accordance with the appeals and recommendations of the regional and universal human rights protection system.

Accordingly, on 12 March 2020, pursuant to necessity and emergency Decree No. 260/2020, the public health emergency, declared under Act No. 27.541 of 21 December 2019, has been extended for a period of one year.

The recitals of the said Decree state “That, in recent days, the spread of cases of the new coronavirus COVID-19 has been observed in numerous countries on different continents, reaching our region and our country. That, in the current situation, it is necessary to adopt new appropriate, transparent, consensual measures based on scientific evidence, in addition to those already adopted since the beginning of this epidemiological situation, in order to mitigate its spread and health impact.”

Subsequently, on 19 March 2020, the National Executive Branch issued the necessity and emergency Decree No. 297/2020, which provided for a mandatory and preventive lockdown for all persons living or temporarily located in the country at the time of its issuance, in order to protect public health, which is an inalienable obligation of the State.

This decree provides that, during the mandatory and preventive lockdown, individuals must remain in their usual residences, refrain from going to their workplaces and from moving on roads, routes and public spaces, in order to prevent the spread and transmission of COVID-19 virus and the consequent impact on public health and other derived individual rights, such as the right to life and the right to physical integrity.

In addition, permanent checkpoints have been set up on roads, streets and public spaces, at access points and other strategic locations, in order to ensure compliance with the regulations adopted in the framework of the health emergency.

The recitals of the above-mentioned Decree refer to the exceptional nature of the situation: “That we are facing a potential health and social crisis without precedent, and it is therefore necessary to take appropriate, transparent, consensual measures that are based on available evidence, in order to mitigate its spread and impact on the health system. That, while there is no effective antiviral treatment nor vaccines that could prevent the virus, the mandatory lockdown and social distancing measures play a role of vital importance in addressing the epidemiological situation and mitigating the health impact of COVID-19. That, bearing in mind the experience of countries in Asia and Europe where the SARS-CoV-2 virus has spread earlier, it can be concluded that the success of the measures depends on the following variables: timeliness, intensity (drastic or gradual) and effective compliance with those measures.”

Likewise, Decree No. 297/2020 states “That article 14 of the national Constitution establishes that ‘all the inhabitants of the Nation are entitled to the following rights, in accordance with the laws that regulate their exercise, namely: to work and perform any lawful industry; to navigate and trade; to petition the authorities; to enter, remain in, travel through and leave the Argentine territory’. Although

this is one of the fundamental pillars guaranteed in our legal order, it is subject to limitations for reasons of public order, security or public health. Indeed, the International Covenant on Civil and Political Rights recognizes in its article 12, paragraph 1, the ‘... right to liberty of movement...’, and article 12, paragraph 3, provides that the rights set forth therein ‘shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (*ordre public*), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant’... That the measures established in the present Decree are essential, reasonable and proportionate to the threat and the health risk that we are facing.”

It should be noted that the measure provided for in Decree No. 297/2020 was initially established until 31 March 2020, but was then successively extended by Decree No. 325/2020 until 12 April 2020, Decree No. 355/2020 until 26 April 2020, Decree No. 408/2020 until 10 May 2020, and lastly by Decree No. 459/2020 which provided for its extension until 24 May 2020 included.

The described exceptional situation demonstrates the legitimacy of the aims to be preserved. Indeed, the lockdown measures have been adopted in a reasonable manner, in accordance with medical information that demonstrated their importance for preventing the spread of the disease and the experience of other countries that had to address this serious situation earlier.

In this regard, it can be claimed that, after more than 50 days since the issuance of Decree No. 297/20, the mandatory and preventive lockdown ordered in Argentina has, to date, enabled the containment of the epidemic, a decrease in the speed of its spread being registered, preventing the saturation of the health system, as it happened in other parts of the world.

With regard to the proportionality of the measure, it should be noted that, from the beginning, movement of workers performing essential tasks was permitted in various situations, as well as for the assistance to children and adolescents, to elder persons and others who require it. Likewise, new exceptions to the lockdown and to the prohibition on movement were established, under complementary regulations, for persons performing different activities and services, so as not to interrupt the provision of essential services and to also include various economic activities. Since the issuance of the last decree – Decree No. 459/2020 – the lockdown has entered a new phase in which various activities in different regions of the country have been authorized, considering the favourable epidemiological trends in most part of the national territory. The conditions of the mandatory and preventive lockdown were not modified in large agglomerations, where the largest proportion of cases in our country is currently concentrated – more than 85%.

Without prejudice to the relevance of the measures set forth, the National Ministry of Health informed that, on 13 May 2020, 316 new cases of COVID-19 were confirmed in our country, bringing the total number of positive cases to 6,879. This demonstrates that, despite the effectiveness of the lockdown, we are still fighting the spread of the disease, without being possible to determine the exact moment when these circumstances will cease.

Furthermore, in addition to the mandatory and preventive lockdown, the Argentine Republic ordered a strict control of entry through the country’s borders, consistent with the restrictions established by other States.

Thus, necessity and emergency Decree No. 274/2020 of 16 March 2020 provided for the prohibition on entry into the national territory for non-resident foreign nationals, for a period of 15 days, through ports, airports, international border crossings, checkpoints and any other access points, in order to reduce the risks of infection. This period was successively extended by Decrees Nos. 331/2020, 365/2020, 409/2020 and 459/2020, until 24 May 2020 included.

Pursuant to necessity and emergency Decree No. 313/2020 of 26 March 2020, the National Executive Branch extended the scope of the prohibition on entry into the national territory to persons residing in the country and to Argentines residing abroad, through ports, airports, international border

crossings, checkpoints and any other access points established under Decree No. 274/2020, while providing for various exceptions to this prohibition.

The recitals of the former provide “That the COVID-19 pandemic continues to escalate, and its community transmission is currently taking place; therefore, bearing in mind the inflow of Argentine nationals and residents analysed above as well as the mode of transmission of the virus, it is considered necessary to introduce measures, in addition to those already adopted, that are reasonable, temporary and proportionate to the risk under consideration, to contribute to safeguarding the health of individuals and their families, both nationals and residents who wish to enter the country and those currently in the country, by minimizing the entry into the national territory of possible cases of potential contagion through its various points of access, for the shortest possible period of time, in order to adapt sufficient safety measures for their re-entry.”

Likewise, the text of the same Decree No. 313/2020 states that the measure constitutes a decision of a transitory nature, which responds not only to the imperative need to protect those located in the national territory from the spread of coronavirus COVID-19, but also to establish at points of access to the country the conditions necessary, in terms of infrastructure and health care, to receive those who are still abroad and who have to travel to their homes or confine themselves in the place where they arrive.

Subsequently, pursuant to necessity and emergency Decree No. 331/2020 of 1 April 2020, the competent State authorities were instructed to establish the relevant timelines and coordinate the actions necessary to enable the gradual entry into the national territory of persons resident in the country and of the Argentines resident abroad that could not have entered while Decree No. 313/2020 was in effect, paying particular attention to persons belonging to at-risk groups.

Under the said Decree, the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship was instructed to extend the validity of the Programme for the assistance of Argentines abroad in the context of the coronavirus pandemic, established pursuant to resolution MRECIC 62/2020 of 28 March 2020, in order to respond to the urgent needs for accommodation, food, health care and all other basic needs of the Argentines abroad, in all those cases where they are in a situation of vulnerability that does not allow them to resolve the issue by their own means. In that context, the respective funds were transferred to different consulates to respond to the above-mentioned needs, the State authorities making every effort to ensure the return of all persons who wish to re-enter the country in accordance with the aforementioned regulations.

At the same time, it should be noted that there are no restrictions at the land borders on Argentines or residents entering in private vehicles. On the other hand, the State regulates the number of Argentines and residents who may return on a daily basis to our country by air and by land using public transport, the entry of Argentines and residents following therefore an administered procedure.

Indeed, according to the information registered by the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship, as of 20 April 2020, approximately 90 % of Argentines who wanted to re-enter the country during the pandemic had been able to do so.

In this regard, 168,140 persons had returned to our country by air, land or river between 16 March and 17 April 2020, whereas an estimated total of 21,493 persons had expressed their intention to return to the country by 20 April 2020, therefore 90 % of all the Argentines or residents with intentions of returning to the country have already done so.

Thus, from the information reported, it is clear that the exceptional measures adopted by the national authorities to safeguard the rights to life and to health of the population of our country, limiting individual rights only to the extent strictly necessary, are proportionate, reasonable and relevant in the context of the enormous difficulties and challenges imposed by the current global situation.

Lastly, it should be noted that the Senate of the Nation, in its first special remote session held in our country on 13 May 2020, approved all the necessity and emergency decrees issued by the National Executive Branch since the mandatory and preventive lockdown had been declared because of the COVID-19 pandemic.

Mesures exceptionnelles pour faire face à la pandémie de COVID-19 en Argentine

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a qualifié la COVID-19 de pandémie, à la suite de l'augmentation du nombre de personnes contaminées dans le monde et du nombre de décès enregistrés. Depuis lors, la crise engendrée par la COVID-19 a conduit à la saturation des systèmes de santé, à la perturbation de l'économie mondiale et à une paralysie sociale généralisée.

Dans ce contexte, la République argentine, tout comme d'autres pays, traverse une situation exceptionnelle, qui a conduit ses autorités à prendre une série de mesures d'urgence pour atténuer la propagation de la maladie, en tenant compte, dans leurs actions, de la protection incontestable des droits de l'homme de tous les habitants du pays, conformément aux appels et aux recommandations du système régional et universel de protection des droits de l'homme.

Ainsi, le 12 mars 2020, en vertu du décret de nécessité et d'urgence n° 260/2020, l'urgence sanitaire publique, déclarée par la loi n° 27.541 du 21 décembre 2019, a été prolongée pour une période d'un an.

Les considérants dudit décret disposent « Que la propagation des cas du nouveau coronavirus COVID-19 a été observé ces derniers jours dans de nombreux pays sur différents continents, atteignant notre région et notre pays. Que, dans la situation actuelle, il est nécessaire d'adopter de nouvelles mesures appropriées, transparentes, consensuelles et scientifiquement fondées, outre celles déjà adoptées depuis le début de cette situation épidémiologique, afin d'atténuer sa propagation et ses répercussions sur la santé ».

Par la suite, le 19 mars 2020, le pouvoir exécutif national a pris le décret de nécessité et d'urgence n° 297/2020 qui prévoit le confinement préventif et obligatoire pour toutes les personnes vivant dans le pays ou y résidant temporairement au moment de sa publication, afin de protéger la santé publique, qui constitue une obligation inaliénable de l'État.

Ce décret prévoit que, pendant la période de confinement préventif et obligatoire, les personnes doivent rester dans leur résidence habituelle, s'abstenir de se rendre sur leurs lieux de travail et de circuler sur les routes, voies et espaces publics, afin d'empêcher la propagation et la transmission du virus de COVID-19 et de prévenir les répercussions sur la santé publique ainsi que sur les autres droits individuels qui en découlent, tels que le droit à la vie et à l'intégrité physique des personnes.

En outre, des postes de contrôle permanents ont été établis sur les routes, les voies et espaces publics, aux accès et autres lieux stratégiques, afin de garantir le respect de la réglementation adoptée dans le cadre de l'urgence sanitaire.

Les considérants du décret précité renvoient au caractère exceptionnel de la situation : « Que nous sommes confrontés à une crise sanitaire et sociale potentielle sans précédent, qu'il est par conséquent nécessaire d'adopter des mesures appropriées, transparentes, consensuelles et fondées sur les preuves disponibles, afin d'atténuer sa propagation et son impact sur le système de santé. Qu'en l'absence de traitement antiviral efficace ou de vaccins qui puissent prévenir le virus, les mesures de confinement et de distance sociale obligatoires jouent un rôle d'importance vitales pour faire face à la situation épidémiologique et atténuer l'impact sanitaire de la COVID-19. Que, compte tenu de l'expérience des pays d'Asie et d'Europe où le virus du SRAS-CoV2 s'est propagé préalablement, on peut conclure que le succès des mesures dépend des variables suivantes : rapidité, intensité (drastique ou échelonnée) et respect effectif de ces mesures ».

De même, le décret n° 297/2020 dispose « Que l'article 14 de la Constitution nationale prévoit que « tous les habitants de la Nation jouissent des droits suivants, conformément aux lois qui régissent

leur exercice : le droit de travailler et d'exercer toute industrie licite ; de naviguer et de faire le commerce ; d'adresser toutes pétitions aux autorités ; d'entrer dans le territoire argentin, d'y résider, d'y circuler librement et d'en sortir ». Bien qu'il s'agisse de l'un des piliers fondamentaux garantis dans notre système juridique, il est soumis à des limitations pour des raisons d'ordre public, de sécurité et de santé publique. En effet, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit en son article 12, paragraphe 1^{er}, le droit de « ... circuler librement... », et au paragraphe 3 du même article, que l'exercice des droits qui y sont consacrés « ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte » ... Que les mesures prévues par le présent décret sont indispensables, raisonnables et proportionnées à la menace et au risque sanitaire auxquels nous sommes confrontés ».

Il convient de noter que la mesure prévue par le décret n° 297/2020 devait initialement courir jusqu'au 31 mars 2020, mais a ensuite été prorogée successivement par le décret n° 325/2020 jusqu'au 12 avril 2020, le décret n° 355/2020 jusqu'au 26 avril 2020, le décret n° 408/2020 jusqu'au 10 mai 2020, et enfin par le décret n° 459/2020 qui a prévu sa prorogation jusqu'au 24 mai 2020 inclus.

La situation d'exception décrite démontre la légitimité des objectifs à préserver. En effet, les mesures de confinement ont été adoptées de manière raisonnable, conformément aux informations médicales faisant état de leur importance pour prévenir la propagation de la maladie et d'après l'expérience des autres pays qui ont dû faire face à cette grave situation préalablement.

À cet égard, plus de 50 jours après la publication du décret n° 297/20, il peut être revendiqué que le confinement préventif et obligatoire mis en place en Argentine a permis, jusqu'à présent, de contenir l'épidémie, une diminution de la vitesse de propagation ayant été enregistrée, permettant ainsi d'éviter la saturation du système de santé, comme cela s'est produit dans d'autres parties du monde.

En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, il convient de noter que, dès le départ, diverses hypothèses ont été prévues pour permettre la circulation des travailleurs essentiels, ainsi que pour l'assistance aux enfants et aux adolescents, aux personnes âgées et aux personnes dans le besoin. Par ailleurs, de nouvelles exceptions au confinement et à l'interdiction de circulation ont été établies, par des normes complémentaires, pour les personnes concernées par différentes activités et services, afin de ne pas interrompre la fourniture de services essentiels et d'inclure également diverses activités économiques. Depuis la publication du dernier décret – le décret n° 459/2020 – une nouvelle phase a été entamée dans le confinement, plusieurs activités ayant été autorisées dans différentes régions du pays, compte tenu de l'évolution épidémiologique favorable dans la majeure partie du territoire national. Les conditions de confinement préventif et obligatoire n'ont pas été modifiées dans les grandes agglomérations, où se concentre actuellement la plus grande partie des cas dans notre pays – plus de 85 %.

Sans préjudice de la pertinence des mesures prises, le Ministère de la santé a informé qu'au 13 mai 2020, 316 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés dans notre pays, portant le nombre total de cas positifs à 6 879. Cela démontre que, malgré l'efficacité du confinement, nous continuons à combattre la propagation de la maladie sans qu'il soit possible de déterminer le moment exact où ces circonstances cesseront.

De plus, outre le confinement préventif et obligatoire, la République argentine a prévu un contrôle strict de l'entrée aux frontières du pays, en conformité avec les restrictions établies par d'autres États.

Ainsi, le décret de nécessité et d'urgence n° 274/2020 du 16 mars 2020 prévoit une interdiction pour les étrangers non-résidents d'entrer sur le territoire national, pendant une période de 15 jours, par les ports, les aéroports, les points de passage internationaux, les postes-frontières et tout autre point d'accès, afin de réduire les risques de contagion. Cette période a été prolongée successivement par les décrets n° 331/2020, 365/2020, 409/2020 et 459/2020, jusqu'au 24 mai 2020 inclus.

Conformément au décret de nécessité et d'urgence n° 313/2020 du 26 mars 2020, le pouvoir exécutif national a étendu le champ d'application de l'interdiction d'entrée sur le territoire national aux personnes résidant dans le pays et aux Argentins résidant à l'étranger, par les ports, les aéroports, les points de passage internationaux, les postes-frontières et tout autre point d'accès établi par le décret n° 274/2020, tout en prévoyant diverses exceptions à cette interdiction.

Les considérants du premier décret disposent « Que la pandémie de COVID-19 continue de s'aggraver et que sa transmission locale est actuellement en cours, de sorte que, compte tenu du flux d'entrée des nationaux et résidents argentins analysé ci-dessus et du mode de transmission du virus, il est jugé nécessaire de prendre des mesures, outre celles déjà adoptées, qui soient raisonnables, temporaires et proportionnées au risque en considération, afin de contribuer à la protection de la santé des personnes et de leur famille, tant des nationaux et résidents qui souhaitent entrer sur le territoire que de ceux qui se trouvent actuellement dans le pays, en minimisant l'entrée sur le territoire national d'éventuels cas potentiellement contagieux, par ses différents points d'accès, pendant la période la plus courte possible, afin d'ajuster les mesures de sécurité suffisantes pour leur réadmission ».

En outre, le texte du même décret n° 313/2020 indique que la mesure constitue une décision à caractère transitoire, qui répond non seulement à la nécessité impérative de protéger les personnes se trouvant sur le territoire national contre la propagation du coronavirus COVID-19, mais également de créer les conditions nécessaires au niveau des points d'accès au pays, en termes d'infrastructures et de soins de santé, pour accueillir ceux qui sont encore à l'étranger et qui doivent se rendre à leur domicile ou se confiner dans le lieu où ils arrivent.

Par la suite, conformément au décret de nécessité et d'urgence n° 331/2020 du 1^{er} avril 2020, les autorités compétentes de l'État ont été chargées d'établir les calendriers pertinents et de coordonner les actions nécessaires pour permettre l'entrée progressive sur le territoire national des personnes résidant dans le pays et des Argentins résidant à l'étranger qui n'auraient pas pu entrer pendant la période de validité du décret n° 313/20, en accordant une attention particulière aux personnes appartenant à des groupes à risque.

Au titre dudit décret, le Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte a été chargé de prolonger la validité du Programme d'assistance aux Argentins à l'étranger dans le contexte de la pandémie de coronavirus, créé par la résolution MRECIC 62/2020 du 28 mars 2020, afin de répondre aux besoins urgents de logement, d'alimentation, de soins de santé et de tout autre besoin fondamental des Argentins à l'étranger, dans les cas où ils se trouvent en situation de vulnérabilité ne leur permettant pas de résoudre le problème par leurs propres moyens. Dans ce cadre, les fonds respectifs ont été transférés aux différents consulats pour répondre aux besoins susmentionnés, les autorités de l'État faisant tout leur possible pour assurer le retour de toutes les personnes qui souhaitent rentrer dans le pays conformément à la réglementation susmentionnée.

Dans le même temps, il convient de noter qu'il n'y a aucune restriction aux frontières terrestres pour les Argentins ou résidents entrant par véhicules privés. D'autre part, l'État détermine le nombre d'Argentins et de résidents qui peuvent rentrer quotidiennement sur le territoire par avion et par transports publics terrestres, la procédure d'entrée des Argentins et des résidents étant donc dûment administrée.

En effet, d'après les informations enregistrées par le Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, au 20 avril 2020, environ 90 % des Argentins qui souhaitaient rentrer dans le pays durant la pandémie ont pu le faire.

À cet égard, 168 140 personnes sont rentrées dans notre pays par voie aéroportuaire, terrestre ou fluviale entre le 16 mars et le 17 avril 2020, alors qu'on estime qu'un total de 21 493 personnes avaient exprimé leur intention de rentrer au pays avant le 20 avril 2020, par conséquent 90 % de tous les Argentins ou résidents avec l'intention de rentrer dans le pays ont déjà pu le faire.

Ainsi, il ressort clairement des informations présentées que les autorités nationales ont pris des mesures exceptionnelles qui sont proportionnées, raisonnables et pertinentes afin de garantir les droits à la vie et à la santé de la population de notre pays, en ne limitant les droits individuels que dans la mesure strictement nécessaire, dans le cadre des énormes difficultés et défis imposés par le contexte mondial actuel.

Enfin, il convient de noter que, lors de sa première session spéciale à tenue à distance dans notre pays, le 13 mai 2020, le Sénat de la Nation a approuvé tous les décrets de nécessité et d'urgence pris par le pouvoir exécutif national depuis la déclaration du confinement préventif et obligatoire en raison de la pandémie de coronavirus.